



RAD: 080013110003-2022-00216-00

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: JELITZA COROMOTO MALDONADO BERRIO

ACCIONADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESPECIAL DE BARRANQUILLA.

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA ORAL DE BARRANQUILLA, JUNIO DIEZ (10) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

1. ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a resolver la solicitud de amparo constitucional elevada por la señora JELITZA COROMOTO MALDONADO BERRIO en nombre propio contra LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESPECIAL DE BARRANQUILLA.

1.1. HECHOS

Los relevantes se resumen así:

Afirma la accionante que la venían atendiendo en la EPS SALUD TOTAL y que hace unos días le suspendieron el servicio, manifestando como motivo que la Registraduría Nacional del Estado Civil le había cancelado su cédula de ciudadanía. Por ello presentó Derecho de petición ante dicha entidad en fecha Abril 19 de 2022, solicitando revocatoria de la Resolución que ordenó la cancelación de su cédula, sin recibir respuesta, con lo cual la están perjudicando, porque no están recibiendo servicios de salud ni ella, ni sus hijos.

1.2. DERECHO INVOCADO

Se alega como vulnerado el derecho fundamental DE PETICIÓN.

1.3. ACTUACION PROCESAL

Asignada por reparto a este Despacho Judicial, esta acción constitucional se admitió con providencia de fecha 27 de mayo de 2022, en la cual se requirió a la accionada para que dentro del término de 48 horas rindiera informe sobre los hechos materia de la presente acción, para lo cual se ordenó su notificación. Así mismo se vinculó a la EPS SALUD TOTAL.

El doctor LUIS FRANCISCO GAITÁN PUENTES jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó que mediante Resolución No. 14442 del 25 de noviembre de 2021, se dispuso la anulación del registro civil de nacimiento con indicativo serial 54491889, con fecha de inscripción del 23 de agosto de 2016 a nombre de JELITZA COROMOTO MALDONADO BERRIO y



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla

la correspondiente cancelación de la cédula de ciudadanía No. 1.045.753.540 expedida con base en ese documento.

No obstante, en virtud de la presente acción constitucional, la Dirección Nacional de Registro Civil y la Dirección Nacional de Identificación, mediante Resolución No. 14480 del 31 de mayo de 2022, revocaron parcialmente el citado acto administrativo y la parte accionante cuenta con su registro civil de nacimiento en estado válido y cédula de ciudadanía en estado vigente. Y que dicha decisión fue debidamente notificada a la actora a su correo electrónico.

2. PROBLEMA JURIDICO

Conforme la relación fáctica traída en la solicitud de amparo se tiene que el objeto de la presente acción constitucional se centra en establecer: ¿Si la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESPECIAL DE BARRANQUILLA, al no contestar la solicitud de la accionante JELITZA COROMOTO MALDONADO BERRIO efectuada el día 19 de abril de 2022, le está vulnerando su derecho fundamental DE PETICIÓN?

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con las preceptivas del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto No. 2591 de 1.991, las personas pueden demandar en tutela ante cualquier autoridad judicial, cuando quiera que por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, según el caso, resulten vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales constitucionales, siempre que no dispongan de otro medio de defensa judicial ordinario idóneo para su protección, a menos que se utilice como mecanismo de amparo transitorio para evitar la acusación de un perjuicio irremediable.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto tenemos que la accionante el día 19 de abril de 2022 solicitó a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESPECIAL DE BARRANQUILLA revocatoria de la Resolución que ordenó la cancelación de su cédula. Hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional no le habían contestado.

El doctor LUIS FRANCISCO GAITÁN PUENTES jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó que mediante Resolución No. 14480 del 31 de mayo de 2022, revocaron parcialmente el acto administrativo mencionado por la actora y ahora ella cuenta con su registro civil de nacimiento en estado válido y cédula de ciudadanía en estado vigente. Y que dicha decisión



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla

fue debidamente notificada a la accionante a su correo electrónico; aportando prueba de ello.

Este Juzgado ha sostenido, que si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir.

Dada la información suministrada por la entidad accionada, la cual se allegó con el soporte correspondiente, es claro que se está frente a un hecho superado en uno de los extremos de la petición inicial de tutela. En consecuencia, ante la existencia de un hecho superado, este Juzgado declarará la carencia actual de objeto.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se presenta, en la medida en que el propósito de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional y dicho objetivo se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa, por cualquier causa. Es decir, es en principio, una finalidad subjetiva¹. Existiendo carencia de objeto *"no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos fundamentales del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia."*² La Corte ha señalado al respecto:

"Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

"Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos".

"No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción

¹ Ver sentencias T-027 de 1999 (en esta tutela la carencia actual de objeto se dio en virtud de la muerte de la actora) y T-262 de 1999 (en esa tutela el peticionario, quien solicitaba no discriminación en el trato laboral, ya no laboraba en la empresa); ver también, sentencia T-001 de 2003, en la cual se confirmó una sentencia que denegaba la tutela al derecho de petición en materia de pensiones en virtud de que para el momento de la decisión ya se había dado respuesta. De igual manera, se puede consultar la sentencia T-137 de 2005, en la cual la demandante solicitaba la atención médica y en el trámite de la acción de tutela, dicha atención fue restablecida.

² Ver Sentencia T-972 de 2000, en la cual se presentaba carencia actual de objeto por fallecimiento del actor, incluso antes de ser fallado el proceso en sede ordinaria.



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla

de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción³."

En consideración a lo anteriormente señalado el Juzgado declarará la sustracción de objeto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley y la Constitución,

RESUELVE

- 1.- NO TUTELAR el derecho fundamental de PETICIÓN, invocado como vulnerado por la señora JELITZA COROMOTO MALDONADO BERRIO en nombre propio contra LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESPECIAL DE BARRANQUILLA, POR CARENCIA DE OBJETO, HECHO SUPERADO, conforme a las motivaciones que anteceden.
- 2.- NOTIFICAR el presente fallo por el medio más expedito de conformidad con lo ordenado en el art. 30 del Decreto 2591 de 1.991.
- 3.- REMITIR a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE
EL JUEZ

GUSTAVO ANTONIO SAADE MARCOS

m.o.a.

Jun. 10/22

Juzgado Tercero de Familia Oral
de Barranquilla

Estado No. 095

Fecha: 13 de junio de 2022

Notifico auto anterior de fecha
10 de junio de 2022

³ Sentencia T-308 de 2003.



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Tercero de Familia Oral de Barranquilla

Firmado Por:

Gustavo Antonio Saade Marcos
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 003 Oral
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **db2148a81d0df3f16cfad7e12399a47d1e80f3d72ee47a5281126cf0bdaae1d**

Documento generado en 10/06/2022 12:34:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>